

LA SOLUCIÓN EUROPEA

LA VANGUARDIA - 05/09/2004

Europa ha sido, es y debe seguir siendo la solución y no el problema. En términos históricos, el proceso de construcción europea representó la superación de la fractura franco-alemana, con dos guerras mundiales de por medio, y la apuesta por la colaboración mutua en un espacio de paz, democracia política y prosperidad económica. Es verdad que todo este proceso no ha estado exento de tensiones, con avances estratégicos y retrocesos tácticos, pero la Europa nacida del tratado de Roma (1957) es hoy un éxito y un modelo: encarna una experiencia única en el mundo globalizado de cómo vertebrar un espacio supraestatal desde un impulso multilateralista y con cesiones de soberanía.

Los euroescépticos de todos los signos critican a menudo las inercias de la eurocracia, con una construcción europea que avanza a marcha lenta y con notables costes, pero más caro y más largo fue en términos económicos, políticos y humanos el proceso de destrucción europea de la primera mitad del siglo pasado. El tercer milenio se ha abierto con la ampliación al Este, que entierra la división de la guerra fría y culmina la definitiva reconciliación europea. La Europa de los 25, que reúne a más de 450 millones de habitantes, afronta de puertas adentro la necesidad de consolidar no sólo una zona de libre mercado sino un área de cooperación y estabilidad. La Unión Europea representa también para todos sus socios el instrumento con el que proyectarse en la economía global y pesar en el convulso escenario internacional.

Entre tanto, el acervo comunitario está constituido no sólo por los intangibles políticos y económicos –Europa como espacio singular de paz, libertad y progreso–, sino por el llamado modelo social europeo como resultado de la convergencia de los idearios socialdemócratas y democristianos de sus padres fundadores. Puede que el actual edificio social europeo deba reformarse para evitar que se desplome por exceso de carga, pero sigue siendo un referente mundial. Basta con preguntarle a un ciudadano de cualquier otra latitud cómo querría que fuese la educación de sus hijos, la sanidad, la jubilación, el sistema de protección de la familia o de cobertura del desempleo... La referencia europea, con sus distintos parámetros, representa una garantía de cohesión social y solidaridad interterritorial. Lo saben muy bien los socios del sur, como es el caso de España, que ha sido receptora neta de ayudas y fondos comunitarios desde su ingreso, en enero de 1986.

La Constitución europea, en este contexto, es el cimiento que precisa la nueva UE ampliada para que la construcción europea se consolide como una realidad política que vaya más allá de una zona económica de libre cambio. El texto que será sometido a referéndum, con todas sus imperfecciones, marcará un antes y un después en términos históricos: carta de derechos y ciudadanía europea, reforma de las instituciones, presidencias más estables (del Consejo y la Comisión), mayor peso del factor población en la toma de decisiones por doble mayoría, fortalecimiento de la política exterior y de seguridad común... Su aprobación, pese a las fracturas intraeuropeas abiertas por la guerra de Iraq y el impacto de la ampliación al Este, debe abordarse con amplitud de miras y lejos de los cálculos partidistas a corto plazo.

La Marca Hispànica

Las casi dos décadas transcurridas desde la adhesión de España a la Comunidad Europea han representado, como recordaba en junio en Brujas un europeísta catalán, un desarrollo socioeconómico formidable, con nuestro definitivo anclaje en la democracia parlamentaria y la asunción de la plena estabilidad política. Supone la premisa mayor de todo silogismo a la hora de debatir la Constitución europea. Si la integración en Europa fue en España un primer banderín de enganche de distintos sectores antifranquistas, en Catalunya constituyó el reencuentro con el espíritu europeísta que está en el origen de su historia. El catalanismo ha hecho siempre de la apuesta europea uno de los pilares de su ideario y de su acción.

El sello europeo de la Marca Hispànica, que forja los cimientos de Catalunya, nos ha alejado de la tentación cíclica en la escena española de considerar a Europa el problema y no la solución a nuestras ambiciones. Sería paradójico, a estas alturas de la historia, que el euroescepticismo ganara adeptos en aquellas fuerzas catalanas que lideraron el proceso de integración europea. Es verdad que la Constitución europea sigue siendo obra de los estados, pero no debe olvidarse tampoco que éstos ya no son lo que eran en 1986 cuando se produjo la integración de España.

Catalunya, que vivió en la transición política el inicio de la devolución de competencias del Estado, ha asistido desde la adhesión europea a un proceso de cesión de soberanía de los estados hacia la UE. Tres de los elementos clásicos de la independencia –moneda, frontera y ejércitos– han sido transferidos a instancias europeas y multilaterales. Es la nueva Europa de las interdependencias que ahora

gana enteros con la inscripción del concepto de ciudadanía europea como suma de ciudadanías, es decir, una ciudadanía compartida que nos permitirá ser ciudadanos de Catalunya, España y Europa.

La laguna que representa la no inscripción del catalán en el artículo IV-10 del tratado, en contraste con la presencia de lenguas que tienen menor peso demográfico, se corrigió sólo parcialmente en la renegociación del texto. Está claro que el Estado español defendía en Europa un rango de cooficialidad del catalán como lengua española que aún no había aplicado en España. Se trata de una asignatura pendiente, a partir de una relectura del artículo 3 de la Constitución española, que no debe cargarse al déficit de la Constitución europea. Es en España, donde está abierto un proceso de reforma estatutaria y constitucional, donde debe empezar a resolverse.

Entre tanto, el riesgo de aquellas fuerzas que en Catalunya abonen un no a la Constitución europea es que, sin serlo, se diluyan en la sopa de letras de los grupos euroescépticos y antieuropeos. Es una opción legítima, con notable base social en Catalunya, pero que desde una perspectiva histórica puede acabar girándose cual boomerang contra quien la abandere.